

Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ing. Mauricio Macri

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para solicitarle un pronunciamiento público respecto de las declaraciones de su flamante Ministro de Educación, Abel Posse, vinculadas con el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país al que consideró “un ejercicio de venganza disfrazado de justicia”. El CELS, que trabaja hace 30 años por la consolidación de los derechos humanos como ideario democrático en nuestro país, considera que es fundamental que el Jefe de Gobierno aclare a la sociedad si comparte o desaprueba las opiniones de su ministro y si éstas guardan relación o no con la política de Estado de su gobierno en esta materia.

Teniendo en cuenta la función fundamental que tiene la educación como espacio privilegiado de transmisión de valores en una sociedad, y la importancia del proceso de verdad y justicia para la consolidación de la democracia y la construcción de ciudadanía, es indispensable que el Jefe de Gobierno de la Ciudad aclare si las opiniones vertidas por su ministro han sido realizadas “a título personal” o si obedecen a los lineamientos políticos que su gobierno sostiene en relación con las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, y con el deber del Estado de investigar y juzgar a sus responsables.

Hoy, a veintiséis años del retorno de la democracia, y tras un camino que alternó justicia, impunidad y derecho a la verdad, se ha reabierto en nuestro país un proceso que promueve la superación de los efectos del terrorismo de Estado y el fortalecimiento de la democracia. La apertura y el avance de una gran cantidad de causas judiciales que se encuentran en trámite, marcan un punto de inflexión que debe ser sostenido con el compromiso de los gobiernos con la verdad y la justicia. Por lo demás, diversas decisiones de la Corte Suprema, del Congreso de la Nación, de distintos tribunales del país y de tribunales internacionales de derechos humanos ratifican la legitimidad del proceso de verdad y justicia en Argentina en el marco del respeto al Estado de derecho y a las garantías del debido proceso, y sostienen que se trata de un modelo que debe ser seguido por muchos otros países.

Por ello, entendemos que la consideración de este proceso institucional —que atraviesa a todos los poderes del Estado— como un “ejercicio de venganza” implica un desprecio de los

valores democráticos, que no se condice con la responsabilidad pública que se le ha conferido al Ministro Abel Posse. Y por esta misma razón es crucial que la sociedad conozca cuál es la posición del Jefe del Gobierno porteño sobre el proceso de justicia de los responsables de crímenes de lesa humanidad, sobre el que se sientan las bases profundas de la gobernabilidad democrática en nuestro país.